
EL CIRCULO MAGICO

Julio R. Aramberry



El intento de rebelión militar de los días 23 y 24 de febrero pasados ha precipitado al país y, en especial, a la izquierda a una situación de pasividad y laxitud que dura ya demasiado. Ese sentimiento de impotencia no se corresponde ni con la situación real ni con la actitud esperable de unos partidos que se proponen cambiar la vida o profundizar la democracia.

LA FRAGILIDAD DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Sin embargo, partiendo de las más altas cumbres de la izquierda, se ha generado una tendencia que, inconsecuentemente, tiende a minusvalorar las causas reales de los hechos o, al me-

nos, a no plantearlas de modo profundo y públicamente. Hablar de conjuros o sortilegios para enfrentar una realidad tan compleja como la presente no es la mejor forma de abrir paso a una comprensión racional de sus problemas. Lo acontecido en aquellas jornadas puede y debe examinarse en términos de relaciones entre fuerzas sociales, de coyuntura específica, de cri-

sis del sistema política impuesto por consenso en los últimos años.

Es lógico que haya resistencias a llevar a cabo un análisis a fondo de la política de la transición y de su continuación a partir de 1979 por parte de quienes fueron sus principales defensores y responsables. Nunca es sencillo reconocer que las propias acciones, junto con otras causas, han dado estos frutos amargos. Pero, por más que se hable de maldiciones o que, como otros, se afirme, una vez más, aquello de *ya lo había dicho yo*, es tarea inexcusable de las fuerzas de izquierda en España hacerse una idea más compleja de la situación actual que la que brota del golpe y del miedo a su respiración.

Un paso en ese sentido lo dan quienes afirman la gran fragilidad de la democracia española, de la que esos sucesos serían consecuencia. El diagnóstico es ciertamente irreprochable, pero posiblemente no lo sean tanto los razonamientos que llevan a él. Si es cierto que nuestra democracia es frágil, no lo es menos que, comparativamente, es hoy mucho más frágil que en el momento de iniciarse la transición, en 1976-77. Su fragilidad no es otra que la de un sistema político parlamentario que se ha ido separando progresivamente del pueblo español para perderse, a menudo, en una nebulosa de desconexión con la que, lógicamente, pocos son quienes, más allá del hemiciclo y los estados mayores de los partidos, pueden sentirse identificados. Para decirlo con acertada expresión de Gianfranco Pasquino, es la fragilidad de una democracia sin el pueblo. Nuestra democracia es frágil, y aquí seguramente discrepamos de los autores del argumento, porque, sobre todo, la izquierda en su conjunto ha aceptado recortarla y autolimitarse hasta el punto de que su futuro carece prácticamente de interés para muy amplios

sectores de nuestra sociedad que la ven como cosa de políticos.

Este es el círculo mágico en que se ha movido la sociedad española desde 1977 y que ha acabado por minar a la democracia desde su interior. Las grandes fuerzas de la izquierda planteaban correctamente el peso de determinados sectores e instituciones sociales, procedentes de la dictadura, pero, en vez de dotarse de los medios necesarios para afrontar los indudables problemas que eso representaba, optaron por aceptar el pacto propuesto por la representación política de la derecha, a saber, intercambiar su aceptación de las formas políticas de un régimen democrático (Constitución, elecciones, autonomías, parlamentarismo, etc.) por el mantenimiento en su integridad del aparato de Estado configurado durante el franquismo (Ejército, Tribunales, Policía, Administración Civil, etc.).

Algunos, pocos y mal vistos, dijimos entonces que ambas cosas no podían ser compaginadas y que su incompatibilidad no podía superarse *con imaginación*, que el mayor peligro para la democracia española provendría necesariamente de ese aparato de Estado a cuya depuración y democratización se renunciaba. Pero se decía que eso era revanchismo incompatible con la reconciliación nacional y la superación de la guerra civil. Por el contrario, el milagro político español consistiría, se argumentaba, en hacer posible esa convivencia de opuestos. Hoy ya sabemos que los milagros son tan imposibles en la vida social como en el reino de la naturaleza.

Pero tuvo que aparecer el siniestro tricorno del teniente coronel Tejero para que nos diésemos cuenta de la imposibilidad del prodigio. Hasta entonces, la política de la izquierda española se había metido en el círculo mágico de

**Si es cierto que nuestra
democracia es frágil, no lo es
menos que, comparativamente, es
hoy mucho más frágil que en el
momento de iniciarse la transición**

la fragilidad reforzada. La moderación trajo el consenso y la política invisible y ésta, a su vez, la necesidad de atemperarse siempre a las exigencias de los poderes fácticos, de limitar progresivamente las exigencias políticas y sociales así como la vida de los sujetos autónomos que intentasen defenderlas. El *realismo* fue acompañado del abandono por parte de las fuerzas parlamentarias de todos aquellos movimientos que pudiesen causar dificultades en el diálogo con los intermediarios de los poderes fácticos, ya fueran los movimientos de los soldados, de mujeres, vecinales, ecologista, etc. Pero, lejos de disminuir la fragilidad de la democracia, esta vuelta de la tuerca la reforzaba. Al no ver resistencia, crecieron aún más las exigencias y las campañas de la derecha y los *realistas* volvieron a sacar la misma conclusión: seguir cediendo en bien del sistema. Lo que, a su vez, separaba más y más a los partidos de sus bases militantes y al parlamento de la sociedad. Y, luego, vuelta a empezar. Cundía sí el desencanto y hasta algunos intelectuales como Aranguren lo podían teorizar con visos de plausibilidad, pero las fuerzas de izquierda seguían aferradas a la idea de que no era posible ninguna otra actitud para salvar la democracia. Al final, ni siquiera esa moderación creciente sirvió de nada. El tricornio de Tejero demostraba, en la práctica, que Aquiles siempre acaba por alcanzar a la tortuga.

La indudable fragilidad inicial de nuestra democracia dio paso a una política que la hizo aún más frágil. Sus limitaciones se reforzaron y, en muchos campos de la vida social, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución no eran más que un trozo de papel que diversos funcionarios estrujaban entre sus manos.

Creo que es posible llegar hoy a un

**La indudable fragilidad
inicial de nuestra política
dio paso a una
política que la hizo
aún más frágil.**

balance sumario, pero no menos cierto en su afirmación lapidaria. La política de moderación ha fracasado. No ha servido para hacer que el sistema político sea más respetado y aceptado por quienes siempre fueron sus enemigos. Antes bien, nos ha dejado en peor situación de la que teníamos a su comienzo. No es casualidad. Los movimientos sociales tienen su propia dinámica y, una vez que, como en el caso español, se les conduce a la disipación de su potencial de presión, tardan mucho en poderse recomponer. Seguir insistiendo en ese mismo camino, como se ha hecho después del 23 de febrero, con la votación afirmativa (PSOE) o la abstención cómplice (PCE), ante leyes tan antidemocráticas como la llamada de Defensa de la Democracia es reincidir en el error.

Seguramente esta crítica será contestada, como de costumbre, con aquello de «si hemos seguido este camino de moderación y ahí están los resultados, ¿qué no habría sucedido de haber defendido otro más firme y enérgico?». Es una trampa en la que no se debe caer. Si nos atenemos a los hechos, lo único que podemos juzgar es esta política de moderación y la única conclusión posible es que ha fracasado; que, lejos de reforzar las posibilidades del régimen democrático, ha contribuido a su disminución.

Por eso creo que es menester enderezar camino y romper el círculo mágico de la impotencia. La democracia sólo puede consolidarse mediante la defensa firme de sus principios y sus prácticas políticas y sociales, nunca con actitudes tibias frente a los comportamientos autoritarios ni con no querer ver lo que salta a la vista. Lo que no es sólo cuestión de buenos deseos. Aunque se haya perdido un terreno considerable, un análisis frío de la situación actual puede permitir recuperarlo y aún mar-

car más puntos para asentar firmemente el régimen democrático en nuestro país.

La implausibilidad del golpe militar

Lo primero que requiere un análisis es la situación de la derecha, en su conjunto, y sus relaciones con la institución militar y otras represivas, que permitan hacerse una idea de nuestra posición.

Ante todo, conviene recordar algo en lo que no se insiste bastante: el intento de rebelión militar fracasó. De haber sido tan poderoso y amplio como se ha dicho en ocasiones, difícilmente podríamos estar escribiendo ahora estas líneas.

Los medios de comunicación han insistido una y otra vez en el papel determinante del Rey y de las propias fuerzas armadas en ese resultado. No vamos a discutir ahora esto, pero, si no queremos caer en la imaginaria del *western*, difícilmente hubiera podido lograr ese resultado un hombre sólo ante el peligro. El fracaso del golpe militar se debe, ante todo, a su falta de unidad política interna y, también, a la implausibilidad del mismo para amplios sectores de las fuerzas de derecha que el Rey representó con su actitud leal a la Constitución. Esto es algo que conviene tener en cuenta.

Por causas históricas recientes, en las que no podemos entrar ahora, hay una notable descompensación en la ideología, el peso social y el poder político de la derecha española y las instituciones armadas. La mayoría de las fuerzas sociales de derechas ven hoy al régimen democrático como la mejor forma posible de organizar el contrato social. Que gentes y órganos de expresión con la tradición de Fraga o de «ABC» se muestren inequívocamente en contra de las soluciones golpistas, dice mucho en favor de esa tesis.

La extrema derecha sigue siendo notablemente minoritaria y sus conceptos obsoletos, que sus jóvenes matones ni se molestan en leer por aquello de la indigestión de letras, sólo hablan a un grupo de personas bastante adentradas en esto que se llama pudorosamente la *tercera edad*. Una de las pruebas más notables de ese aislamiento la da el hecho de que, pese a haberlo intentado a fondo, fueron por completo incapaces de convertir en apoyo social el indudable malestar popular causado por las recientes acciones criminales de GRAPO y ETA en Madrid.

Ahora bien, esa situación de las fuerzas sociales de derecha se invierte en el seno de las fuerzas armadas y los cuerpos de policía y guardia civil. Aquí la simpatía por las opciones autoritarias es notable, y, lógicamente, el poder de esos cuerpos armados opera con una considerable autonomía. Pero el problema no es tanto el de la descompensación de opciones políticas, cuanto la posibilidad de que esa autonomía de que gozan las instituciones armadas pueda ser completa. Estas, como la mayoría de la sociedad, se indignan con las actividades terroristas de ETA y GRAPO que les golpean directamente y tienden a disculpar, por compensación, el terrorismo de derecha y las actividades ilegales de algunos de sus miembros, como en el caso Arregui y en los crímenes de Almería. Numerosos sectores militares ven con desconfianza la contradictoria política autonómica que, en la derecha ucedista, es un auténtico juego de despropósitos y, en la izquierda, ocasión habitual para la demagogia incontrolada. Numerosos sectores militares ven con preocupación la crisis económica y social en que se halla el país y las dificultades

La política de moderación ha fracasado. No ha servido para hacer que el sistema político sea más aceptado por sus enemigos

para salir de la misma. Muchos, debido al aislamiento social en que viven, a su cultura política autoritaria y a su tendencia a creer que la sociedad pue-

de regirse con las mismas normas que un cuartel, son proclives a aceptar la propaganda insostenible de la extrema derecha y sus órganos de intoxicación que presentan al régimen democrático como raíz y origen de todos esos males.

Pues bien, ni aun así parece pensable que ese indudable descontento pueda hallar salida en un golpe militar, ni que éste signifique lo mismo para todos los sectores que verían con agrado un cambio de rumbo en la política presente. El fracaso de la rebelión militar reciente no hizo más que reflejar esa falta de propósito político unitario. Se ha hablado mucho de que el golpe era en realidad varios golpes, lo que parece bastante correcto. Pero en lo que no se ha insistido demasiado es en el hecho de que esos diversos golpes o estrategias no podían convivir porque representaban alternativas excluyentes.

Sin entrar ahora en investigaciones detectivescas ni en cotilleos periodísticos, parece que en el 23-F había, al menos, dos guiones posibles, a los que llamaremos situación A y situación B.

La situación A es la representada por Milans del Bosch y los insurrectos de Tejero. Su propósito, simple pero claro, podría resumirse en la vuelta a los momentos de *esplendor* del franquismo. El bando de declaración del estado de sitio en Valencia es todo un símbolo: se trataba de desmontar, en un primer momento, el régimen democrático para dar paso, mediante la oportuna represión, a un régimen corporativo y dictatorial, ése que defienden los decrépitos combatientes alcazareños. El propósito era firme, pero no menos cómico, en la medida en que el gesto marcial carecía de los medios necesarios para ser creíble. ¿Se ha reparado, por un momento, en el tipo de represión que hubiera sido necesario para su triunfo? Por macabro que sea el

¿Puede pensarse en la vuelta a las reglamentaciones de trabajo y a la imposición del sindicato vertical?

ejercicio, si tratamos de cuantificar su potencial mortífero, veremos que, para conseguir el objetivo de devolver España a 1939-40, hubiera sido necesario un

alto número de ejecuciones y encarcelamientos, tan alto que se hace difícil pensar que sea posible, más allá de la mente de Tejero y compinches, en las circunstancias actuales. Y junto a los muertos y desaparecidos, ¿podría pensarse seriamente en iniciar las depuraciones de maestros, funcionarios civiles y hasta militares y gentes de todo tipo para que la máquina burocrática funcionase con unidad de propósito?

¿Se ha reparado en las consecuencias que un golpe de ese tipo tendría para la sociedad española desde el punto de vista social y económico? Por más que las mentes simples de los golpistas y sus inspiradores lleguen a creer que la crisis económica es *cosa de rojos*, sus mecanismos no dejarían de operar y aun de agravarse. Lógicamente, la opción nacionalista que vendría impuesta por la estructura misma del golpe cegaría todas las posibilidades de acceso a la CEE. La política monetarista que se impondría llevaría a una rápida y seria contracción de la demanda que, a su vez, arruinaría a cientos de pequeñas empresas. Por lo que hace a las grandes, que podrían resistir mejor ese bajón, ¿puede pensarse en la vuelta a las reglamentaciones de trabajo y a la imposición del sindicato vertical? Aun en el caso de que todo esto fuera posible, es indudable que, al cabo de algunos, pocos, años, la situación de la derecha sería aún más difícil que en los últimos tiempos del franquismo y primeros de la transición. Pero, por eso, difícilmente podría el golpe discurrir por esta situación A.

Sucede, empero, que la B tampoco era mejor en cuanto a sus posibilidades, precisamente porque no podía ser tan simple y brutal como la anterior. La operación De Gaulle implicaba al-

gún grado de negociación con esa izquierda que no puede ser bruscamente borrada de la faz de la tierra. Tampoco era muy claro cómo esto podría llevarse a efecto: ¿golpe a la turca? ¿Ruptura constitucional momentánea para volver pronto a un régimen constitucional, aunque fuera más duro que éste? ¿Reforma constitucional por vías de hecho? Aparte de la falta de claridad, ¿no serían estos objetivos más fácilmente asequibles por la utilización de los mecanismos constitucionales actualmente previstos?

Lo que, en cualquier caso parece cierto, es que ha sido la indefinición de los propósitos y la incompatibilidad de los proyectos políticos lo que ha hecho fracasar la rebelión. La descomposición de la derecha a la que antes nos referíamos en sus planos civiles y militares, representada por la actitud del Rey, ha jugado una mala pasada a los golpistas y ha mostrado a las claras las limitaciones de esa opción que, de haber triunfado, lo hubiera hecho con un coeficiente de legitimidad inferior incluso a los que tuvieron los golpes de Chile y de Argentina.

Para la derecha, globalmente, el régimen democrático, puede que reformado y endurecido, pero democrático al fin, sigue siendo hoy la opción más rentable de todas. Para ella es mucho más positivo llegar a acuerdos como el recién alcanzado entre el Gobierno, la CEOE y las centrales mayoritarias sobre limitación salarial a cambio de un compromiso de que el paro se mantenga en sus niveles actuales, que tratar de imponer por la fuerza bruta sus objetivos. Como en todos los países capitalistas avanzados, también en el nuestro es más segura una democracia en la que puedan incluirse los representantes políticos y sindicales de la mayoría de la sociedad, de los asalariados. Por eso, el golpe, aun siendo técnicamente posible, aun siendo

una amenaza que no conviene desdeñar, es políticamente implausible y la izquierda debe sacar de ahí unas conclusiones que permitan consolidar la democracia.

La triste realidad, sin embargo, es que, hasta el momento, la izquierda ha carecido de política militar, perdida entre la tentación de la adulación al ejército y la de enseñarle como usar la tecnología militar. Esto ha formado parte del círculo mágico de la fragilidad.

La formulación de una política militar clara, que apoye la completa democratización de la institución y la subordinación del Ejército al poder civil y a los deseos de la voluntad general, es absolutamente necesaria. Tal opción estratégica debe ir acompañada de las necesarias cautelas tácticas, lo que será, sin duda, una tarea que nuestros políticos hayan de afrontar día a día. Pero sin ocultar ni sus fines ni sus medios. En este sentido, será sumamente importante la actitud que se adopte frente a los próximos consejos de guerra a los golpistas y saber si seremos capaces de exigir juicios justos y rápidos y castigos ejemplares para los implicados, por todos los medios a nuestro alcance, al tiempo que se llevan hasta un final, hoy no muy claro, las investigaciones sobre la banda de franquistas civiles que alentaron esa tentativa. Sólo una política clara en éste y demás terrenos referentes a la cosa militar puede establecer los adecuados cauces entre la izquierda y las fuerzas armadas, y hacer ver a quienes votan por aquella opción que si se sabe lo que hacer con lo de su democratización.

Los proyectos de la izquierda

El golpe, aun siendo técnicamente posible, es políticamente implausible y la izquierda debe sacar de ahí unas conclusiones que permitan consolidar la democracia

Otras de las razones por las que hay que romper el círculo mágico ha sido ya apuntada. La izquierda, a menos que quiera cometer suicidio, no puede

seguir impávida ante la indudable desconexión entre el sistema parlamentario y de partidos y el resto de la sociedad civil. Negar esa desconexión, aunque haya quien lo intente, sería pueril. Una cosa es cantar el desencanto y sus pretendidas virtudes, especialmente ahora que por poco nos desencantan a golpes los sublevados; otra muy distinta negar la evidencia. Hay toda una serie de indicadores bastante precisos para reflejar la desconexión. El primero y más cuantificable es el de la abstención electoral, que no ha dejado de crecer hasta llegar a las cifras increíbles del referéndum del Estatuto Gallego. Otro, más velado por la negativa de los partidos y sindicatos a dar cifras veraces, es la desafiliación política y sindical que sube día a día. Otro más, las tensiones intrapartidarias que suelen saldarse con defeciones y medidas de expulsión. Hay un alto número de votantes y militantes de izquierda que han perdido todo interés por la política. En estas condiciones, aunque por factores aún imprevisibles el PSOE llegase a hacer realidad su viejo sueño de ser una alternativa de poder, es decir, aunque consiguiese una mayoría absoluta de escaños en las próximas elecciones, ¿cabría pensar que tal eventualidad diese paso a las transformaciones que se esperan de él?

También en este terreno hay que salir del círculo mágico de la fragilidad, de esta democracia sin el pueblo que, así, no puede tener un futuro muy brillante. Y hay que salir llevando a cabo un proyecto político de democratización del aparato de Estado, ante todo.

Decía Felipe González hace poco que es menester realizar la revolución burguesa. Si por ella se entiende la consolidación de la democracia para llevarla, más allá del club parlamentario, hasta la sociedad civil su formulación

La pasividad en la reforma de la policía y la ineficacia en la lucha antiterrorista están estrechamente unidas y no podrán afrontarse por separado

es irreprochable. Mi única crítica proviene de entender que tal parece como si el proyecto pudiese llevarse a cabo sin grandes tensiones políticas. También es tarea de los dirigentes de la izquierda decir que las mismas se van a producir y buscar las fórmulas para que, eventualmente, se resuelvan en favor del sistema de libertades. La revolución democrática no es algo de un día, sino un largo proceso de tira y afloja. La democracia francesa se basa tanto en 1789 como en el Frente Popular y la resistencia antinazi, y en Italia la democracia sería muy precaria de no haberse producido la lucha antifascista además del Risorgimento. Es esa tensión de que la democracia es cosa de todos y de todos los días lo que ha fallado en España hasta el momento. Y no podía ser de otra manera cuando los límites del círculo mágico excluían toda real participación popular en el proceso.

Para que esa línea pueda enmendarse es necesario, al menos, un trabajo triple: solucionar en sus grandes líneas el proceso autonómico para hallar una salida a los problemas nacionales, realizar una profunda reforma de la administración civil y elevar la cultura política de los ciudadanos españoles para que éstos puedan sentir como suyo un régimen democrático que, hasta ahora, no lo ha sido. Cada una de esas tres cosas es sumamente complicada. Por eso hay que resolverlas.

Para tratar del tema autonómico de muy poco sirve remontarse a complicadas e inconcluyentes reflexiones históricas. Las causas del autonomismo, su necesidad y sus limitaciones se hallan en el presente, como también lo están las de su mal funcionamiento. Hablar de la Castilla comunera o la Galicia de los irmandiños, más allá de los límites de la estricta investigación de los especialistas, es pura charlatanería que tra-

ta en vano de legitimizar intereses de actualidad.

Pues bien, lo cierto es que, en el tratamiento de este tema, la izquierda ha cometido un cúmulo de errores que urge enmendar. Ante todo, se aceptó la absurda fórmula de *café para todos* con la que UCD y el hoy duque de Suárez trataron de ahogar, nuevamente *para evitar molestar a los poderes fácticos*, los únicos problemas autonómicos que existían seriamente en España, el de Euskadi y el de Cataluña. La izquierda, en especial el PSOE en cuanto fuerza mayoritaria, creyó ver en la formación de las entidades autonómicas un atajo hacia el poder, especialmente en las regiones y nacionalidades más desarrolladas. No había que ser muy perspicaz para caer en la cuenta de que la aceptación de la política de UCD en este terreno iba a tener sus costes. Por desgracia, cuando éstos se hicieron sentir en la aparición de partidos regionalistas más o menos alentados desde Madrid, la respuesta fue meramente oportunista. Si los nacionalistas ganaban sus votos a costa de una enorme demagogia en este terreno, había que seguir su envite y aun superarlo. Poco a poco se ha ido formando así este batiburrillo autonómico que, a menudo, reduplica en gastos e ineficacia la ya de por sí costosa y lenta tarea de la Administración central y está formando nuevos entes públicos cuyo personal y actividades se ven influidos muy a menudo por el más cerril de los clientelismos, lo que indudablemente se presta a críticas que, no por ser interesadas, dejan de resaltar problemas muy serios.

Posiblemente sea necesario iniciar un giro radical en este campo. Conviene que se diga muy alto que los estatutos de autonomía no son el remedio para los males indudables de múltiples regiones españolas. Salvo en los

casos de Euskadi y Cataluña, tal vez en el de Galicia, los problemas no son específicamente nacionales sino de muy diversa índole social y económica. ¿No sería más sensato y eficaz volver a hablar de la democratización de las administraciones municipales y reforzar sus competencias, sin necesidad de mecanismos intermedios de dudosa justificación y eficacia?

Otro de los pies decisivos en que ha de apoyarse la ruptura del círculo mágico es, precisamente, el de la reforma de la administración estatal. En primer lugar, por supuesto, la de los institutos armados de policía y seguridad. Con harta frecuencia se pone de manifiesto que, sobre estar repletos de funcionarios que no se identifican con el régimen democrático, esos cuerpos son incapaces de afrontar seriamente, por lo menos hasta ahora, la lucha contra el terrorismo que incluso redobla su fuerza a consecuencia de algunas acciones de aquéllos. La no democratización de los institutos armados de policía ha sido, a menudo, barrera para una lucha antiterrorista eficaz. Las convicciones autoritarias y antidemocráticas de muchos de sus miembros les inclinan, a veces, hacia actividades abiertamente delictivas que se amparan en la impunidad o el silencio, o la lentitud e inoperancia de las investigaciones cuando se llevan a cabo. Las fuerzas de seguridad de un Estado democrático no pueden tener jamás la menor excusa para adoptar las mismas formas criminales del terrorismo que se trata de combatir. El caso Arregui y los sucesos de Almería son muestras de un procedimiento que, a fin de cuentas, sólo beneficia a los terroristas. Parece haber indicios ciertos de que el etarra T. Linaza ha lleva-

La no democratización de los institutos armados de policía ha sido, a menudo, barrera para una lucha antiterrorista eficaz.

do a cabo una serie de crímenes que, de probarse su culpabilidad, exigen castigo. Pero es comprensible que el gobierno francés pueda negarse a su extradi-

ción si no se garantiza que su suerte, cuando sea entregado a la Policía española, no va a ser la misma que la de Arregui. Mientras comportamientos de

esta clase no se persigan y sancionen con la máxima energía, la credibilidad de las fuerzas de seguridad en la lucha antiterrorista será muy escasa. La pasividad en la reforma de la Policía, la impunidad con que algunos de ellos han amparado a los sediciosos de Tejero y la ineficacia en la lucha antiterrorista, están estrechamente unidas y no podrán afrontarse por separado.

Junto a esto, es indudable que la vida democrática sana exige también una profunda reforma de la Administración. No puede pensarse en un Estado democrático sin una administración eficaz y al servicio de una sociedad libre y moderna. Pero la nuestra, rígida, encorsetada, ineficaz y centralista será, sin duda, un serio obstáculo para cualquier posible implementación de políticas de reforma. Por otra parte, el haber vivido la dictadura sin ningún otro control eficaz que la represión policial sobre determinados funcionarios no afectos, ha generado un funcionamiento corporativo, con algunos focos serios de corrupción (ahí está la auditoría realizada en RTVE), una desmedida intervención política en la carrera administrativa y una fuerte tendencia a la ineficacia. Si esta administración, con su funcionamiento lentísimo, es, de por sí, un obstáculo a las íntimas iniciativas inversoras de UCD, ¿qué no será para con un hipotético gobierno socialista, con el cual no se sentirán identificados la mayoría de sus cuadros ejecutivos? Se necesita, también aquí, un planteamiento a fondo del tema, bastante más completo que para ser resuelto con una ley de incompatibilidades. Más aún, es indudable que una seria reforma de la administración pública, por tener necesariamente que perjudicar intereses de

Cultura política e inserción en el tejido social, cómo se dice, son una y la misma cosa y exigen participación ciudadana.

sectores sociales muy poderosos, por minoritarios que sean, exigen una seria acumulación de fuerzas y un firme propósito político de llevarla adelante,

pese a las eventuales resistencias. ¿Acaso piensa alguien que ese objetivo podría alcanzarse tras una victoria electoral de la izquierda, de los socialistas, si se obtiene por un escaso margen de votos en un clima de abstencionismo creciente?

Lo que nos lleva al punto final de esta intervención: el problema de la cultura política. Cuando se habla de esto, son muchos los que piensan que va ligada a un mayor índice de lecturas. Es, en parte, cierto, pero no basta. Muy al contrario, la cultura política se aprende básicamente en la práctica, en el ejercicio cotidiano de los derechos y libertades públicas, de los deberes ciudadanos. Por eso, un pueblo o una izquierda a la que su representación política aísla cuidadosamente de ese ejercicio difícilmente podrá mejorar aquélla. Cultura política e inserción en el tejido social, como se dice, son una y la misma cosa y exigen participación ciudadana en múltiples iniciativas, asociaciones y manifestaciones que, hasta ahora, la izquierda en conjunto ha temido como a la bicha. Carentes de una base social viva, reducidos cada vez más a su esqueleto organizativo, los partidos de izquierda han reforzado cada vez más sus tendencias endogámicas y su negativa a aceptar cualquier crítica, reforzando así el círculo mágico de incultura política acrecentada durante la transición. Como en tantos matrimonios fallidos, esa situación se resolvió, primero, en silencios cargados de hostilidad y, luego, en la pura y simple deserción de muchos militantes. La profunda crisis del PCE, que amenaza con conseguir lo que en cuarenta años no pudieron Franco y la brigada social, su destrucción, es una de las muestras más reveladoras de

una situación que ha de cambiar radicalmente si queremos ganar la revolución burguesa o, con expresión que creo más feliz, consolidar establemente la democracia.

El aumento de la cultura política es también cuestión de canales de transmisión y comunicación. Esta ha sido otra de las grandes batallas que se han perdido en los últimos años. Seguramente es España el único país de la Europa meridional donde no existe una prensa diaria de izquierda que defienda opciones socialistas. También esto ha tenido que ver con el círculo mágico de la transición, por cuanto jamás se dio una batalla a fondo por la recuperación del patrimonio de partidos y sindicatos que había sido confiscado por el franquismo. Un círculo mágico que obligaba a evitar la discusión y el debate también. Cuando los partidos se empecinan en imponer autoritariamente desde sus órganos de dirección una serie de medidas que saben son difícilmente justificables, es lógico que su prensa, floja y profundamente aburrida, sea sólo leída por un sector ínfimo de su militancia. El caso de *Mundo Obrero* habla por sí solo, pero uno tampoco se hace ilusiones de que las cosas hubieran ido mejor si el PSOE se hubiese decidido a botar un diario socialista. En cualquier caso, aun sabien-

do que tal vez la solución al problema exija un replanteamiento del mito tradicional de que la prensa de izquierda debe coincidir con la prensa de los partidos de izquierda, esta falta de una prensa socialista sería es uno de los grandes obstáculos para el desarrollo de la cultura política en nuestro país. Y algo similar podría decirse de la radio y la televisión, especialmente del empecinamiento con que se trata de identificar el libre acceso a la misma con el mantenimiento de la televisión estatal.

La izquierda, pues, y en especial el PSOE, la única alternativa que previsiblemente queda para hacer política en esa dirección, debe plantearse seriamente hacer la revolución burguesa, en el sentido que se ha indicado, de consolidación democrática. Pero, para ello, debe saber que ésta es bastante más que el mantenimiento de un sistema parlamentario. Esa consolidación exige la ruptura del círculo mágico de la transición, el reconocimiento de que es menester cambiar el rumbo y elaborar, con todas las cautelas tácticas, una política propia. Si de algo ha servido la experiencia amarga del 23-F ha sido para hacernos comprender que una democracia no puede subsistir al margen del pueblo que, sin duda, la desea y la defiende.

Seguramente es España el único país de la Europa meridional donde no existe una prensa diaria de izquierda que defienda opciones socialistas.
